

¿Historicidad sin movimientos sociales?

Reflexión introductoria a partir de las experiencias de Alianza Cívica y el *barzonismo*

El siguiente texto tiene como propósitos fundamentales, en primera instancia, reconstruir algunas de las tendencias generales que rigen actualmente la relación entre el ámbito de la acción colectiva y el del sistema político en México; posteriormente, presentar una breve revisión de algunos de los análisis realizados sobre Alianza Cívica y el barzonismo; y por último, esbozar una serie de reflexiones críticas acerca de los conceptos de historicidad y de movimiento social que se encuentran en la base del accionismo clásico.

Introducción

El presente trabajo iniciará con una lectura general de la relación Estado-sistema político-acción colectiva que viene prefigurándose en nuestro país. Enseguida abordará algunos de los estudios más interesantes que han sido escritos sobre

Alianza Cívica y el *barzonismo*,¹ después de los cuales añadiré algunas opiniones personales sobre ambas acciones colectivas. En la parte final del texto argumentaré por qué, para pensar las transformaciones de los códigos ético-culturales que rigen la producción social, es necesario recuperar la idea touraineana de *historicidad*, pero de una manera fragmentada, múltiple y discontinua, y no como la articulación típico-ideal de *modelos éticos, de conocimiento y de acumulación* que dotarían a eso que llamamos sociedad de una articulación con procesos, conflictos y actores epo-

1 Dicho ejercicio tiene como pretensión efectuar una revisión comparativa de algunas de las posibilidades analíticas con las que contamos actualmente en el estudio de las acciones colectivas en nuestro país.

♦ Sociólogo (EHESS-París).

carlorea@club-internet.fr

calmente centrales. Tomando una decisión como ésta, será posible reenviar el concepto de movimiento social a un nivel de utilización estrictamente heurístico, lo que nos liberaría del drama de seguir afirmando normativamente que ya no existen acciones colectivas capaces de alterar la historicidad. De esa manera podremos, en cambio, preguntarnos cómo acciones colectivas cada vez más complejas y heterogéneas, discontinuas en el tiempo y que alimentan redes de acción social que combinan visibilidad y latencia, son capaces de incidir, en forma discontinua y cotidiana, en distintos niveles de producción social, incluida la historicidad, sin el riesgo de perder los referentes analíticos para distinguir tales niveles de actuación y, con ello, el alcance transformador de cada acción concreta.

Las paradojas de la salida del modelo nacional-popular
y del arribo del neoliberalismo

Históricamente, la modalidad mexicana de Estado nacional popular fue consolidada por la tríada corporativismo-presidencialismo-partido de Estado. Los complementos necesarios de este diseño estatista fueron la movilización de las masas subordinadas directamente al aparato estatal, encarnado por el partido oficial, así como la desarticulación de la oposición y la eliminación de toda posibilidad de disidencia. El diseño societal adquirió así un sello profundamente autoritario y estadocéntrico. Sin embargo, la crisis de este modelo de Estado sobrevino, tanto por agotamiento interno como por su desplazamiento por el modelo neoliberal. Las consecuencias han sido, sobre todo, el relevo de las élites en el poder (con la llegada de los tecnócratas), la liberalización económica, el desmantelamiento de vastas porciones del Estado, la sumisión de las estructuras corporativas y clientelistas de mediación política y social a un nuevo pacto autoritario (ahora de tipo tecnocrático), la

destrucción de muchas otras mediaciones autónomas y, finalmente, el proceso de liberalización del sistema político.

Las reacciones ante los procesos enunciados son diversas. Por un lado, vemos la resistencia de grupos conservadores, hasta hace no mucho tiempo enquistados en el poder, que pretenden recuperar su hegemonía al interior del Estado para restituir al régimen y al sistema político su vieja configuración. En otra dirección, está la manifestación de los demócratas de derecha e izquierda, que se proponen volver funcional y autónomo al sistema político, garantizando fundamentalmente la equidad y la transparencia en la competencia político-electoral y en el desempeño de las funciones públicas. Un tercer sector, que podemos llamar de izquierda —o social-popular, como lo hace Zermeño(1996)—, considera la necesidad de resistir a la embestida neoliberal y de luchar por democratizar no sólo el sistema político (para lo cual se requiere que deje de ser un espacio de élites), sino también el nivel de lo social, a través de estrategias de radicalización de la democracia que no se agoten en lo político-electoral, sino que además lleguen al nivel de la distribución y de la participación social. Finalmente, hay un reducido sector de la izquierda radical que, ante el escenario actual, ha permanecido completamente marginalizado, y sostiene aún estrategias de tipo leninista, como una condición más de supervivencia fundamentalista que de búsqueda de la transformación de la sociedad.

Si consideramos la dinámica del sistema político en su conjunto, apreciamos un proceso de institucionalización de la oposición política por la vía de la apertura y regulación de la competencia electoral, que avanza de la mano de la desarticulación de múltiples actores independientes que no se pliegan a la lógica del discurso oficialista de la transición democrática. Este clima, a la vez de liberalización y de endurecimiento políticos —por demás accidentado— ha

abierto poco a poco márgenes importantes para la manifestación del interjuego conflictual entre los actores políticos nacionales y regionales, proceso hasta hoy inestable, incierto y en distintos momentos en claro riesgo de ser clausurado. Sin embargo, a pesar de tal fragilidad, sería necio soslayar las importantes repercusiones que esta liberalización acotada ha reportado en términos del reconocimiento y activación de la participación ciudadana, con las evidentes modificaciones en lo concerniente a la percepción social del cambio (el cual aparece como una posibilidad agonística pero factible), y también con la paulatina reconfiguración de algunos ámbitos institucionales oficiales y del espectro de actores políticos opositores, los que en general apuestan hoy a la búsqueda y estabilización de una competencia democrática.

Mirando el escenario descrito, podemos lanzar la hipótesis de que México vive —en una visión de largo aliento— una incipiente autonomización de sus esferas públicas, que ha sido activada sobre todo por la tendencia de separación del sistema político y el Estado, condición enunciada entre otros por Touraine (1988) como indispensable para el advenimiento de una democracia auténtica. Este fenómeno está catalizando paralelamente la conformación de una clase empresarial dirigente (muy antipopular pero democrática, en un sentido representativo) que no está subordinada directamente al Estado, y que poco a poco consolida su posición como un actor político autónomo que opone su fuerza a los designios de la tecnocracia dominante. No está de más, sin embargo, recordar que este factor no garantiza por sí mismo un desenlace democratizador, y sí en cambio puede representar la posibilidad de una salida derechizante a todo este proceso.

Si bien en términos generales el espacio público sigue copado por el sistema político, el predominio del Estado en este escenario tiende, aunque muy lenta y problemática-

mente, a ser menor. Además, aparecen en su interior actores que pugnan por una mayor liberalización del sistema político, por el respeto a la auto organización de lo social y por la conformación autónoma de corrientes de opinión pública, a la vez que nace y se moviliza el interés de franjas significativas de la ciudadanía, organizada o no, para avanzar en esa misma dirección.

Vemos, pues, que la crisis del Estado nacional popular mexicano y su sustitución por el Estado neoliberal, mutación generadora de una crisis general mucho mayor en el país, no ha conducido hasta hoy a un caos político incontrolable ni a una situación revolucionaria, sino, en cambio, a un periodo de liberalización política bastante frágil —justamente como lo había anotado Touraine (1988) para el caso de toda la América Latina—. Esta paradoja está acompañada en lo social por una dualización bastante dramática que ha producido un pequeñísimo sector de integrados y una inmensa mayoría de excluidos.

Con el desmantelamiento de los actores de la “modernidad nacional” —de por sí poco desarrollados— a causa de la instrumentación de un proyecto de modernización salvaje (Zermeño, 1998), la planta productiva del país ha sido reducida casi a su élite internacionalizada. Como efecto de este caótico escenario, con el aumento de la miseria y con el retiro de muchas mediaciones institucionales estatales del ámbito social, sobrevino una descomposición acelerada del tejido social que puso en evidencia el vacío de solidaridades comunitarias y societales capaces de procesar este orden de cosas.

Por un lado tenemos, entonces, la participación de las élites sociales que sostienen un discurso principalmente ciudadano y que privilegian canales institucionales o para-institucionales de acción. Por otro, vemos franjas enormes de masas en reflujos que abrazan un discurso popular (asociado más al nacionalismo revolucionario que al imagina-

rio democrático-popular), que actúan como electores volátiles no institucionalizados, alimentan conductas anómicas defensivas o muestran una peligrosa proclividad hacia salidas autoritarias ante la crisis. Es decir, mientras que de una parte encontramos los intentos, aún frágiles e inciertos, de liberalización gradual de la política, en sentido opuesto presenciamos la descomposición de vastas porciones del tejido social a causa de la miseria, la exclusión, el vacío de las intermediaciones sociales y comunitarias y la erosión de muchas de las subjetividades colectivas.

Situándonos ahora en el terreno de las expresiones simbólicas que nutren la acción social y política en México, es posible hipotetizar el coyuntural reflujo del imaginario democrático-popular y la coexistencia tensional de los imaginarios nacional revolucionario y el ciudadano (predominando poco a poco, aunque no definitivamente, éste último en las apelaciones explícitas de los actores sociales y políticos). En la dimensión de las culturas políticas es perceptible el predominio de las pautas “de mercado”, sobre otras del tipo “de secta” o “de ejército”.² Finalmente, las configuraciones identitarias parecen mostrar la reconsideración positiva del factor instrumental, la disminución del papel determinante de los elementos integrativos, y una emergente reflexividad en la construcción de tales identidades.

Para dar mayor sustento a la hipótesis de la tensión entre lo nacional popular y lo ciudadano, recordemos la paradoja ya anunciada por Martuccelli y Svampa para el caso del postperonismo en Argentina:³ Los sectores políticos per-

2 En Rea (1998) extraigo estos tres modelos como parte de las conclusiones del estudio sobre distintos partidos políticos de izquierda en Nayarit (el Partido Popular Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido del Pueblo de Nayarit, el Partido del Frente Revolucionario de Acción Patriótica, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática).

3 Martuccelli y Svampa sostienen que: “si bien es cierto que, de un lado, el peronismo ha comenzado a expulsar la democracia en favor de una ciudadanía social, de otro es el peronismo el que tiende a desarrollar, desde esta posición, un

tenecientes al modelo nacional popular en crisis, representan en la lucha contra el neoliberalismo y sus efectos la encarnación del imaginario democrático ciudadano naciente. Es decir, son los hijos de un modelo completamente antidemocrático, en términos de representación política (no así de participación social), quienes constituyen la posibilidad, con su acción, de acceder a formas más desarrolladas de democracia representativa (sea por vías de izquierda o de derecha). Evidentemente, tal como Touraine lo había dicho, para que haya democracia debe haber actores representables o, mejor aún, como dicen los zapatistas, debe haber actores que sepan mandar obedeciendo.

Sin embargo, acciones colectivas como Alianza Cívica, el barzonismo y el EZLN son muestras de que, si bien en el ámbito social existe el predominio de las tendencias señaladas, no dejan de emerger esfuerzos de organización autónoma que logran reactivar, así sea temporalmente, lazos identitarios y proyectos de futuro

Alianza Cívica y el barzonismo: entre lo que son
y lo que quisiéramos que fueran

a) Los ciudadanos se autoproducen

Alianza Cívica es una asociación civil creada oficialmente el 25 de abril de 1994, fecha en que se firmó su acta constitutiva. El nacimiento de este nuevo actor nacional fue posible gracias al esfuerzo convergente de siete organismos que con anterioridad venían desarrollando un importante trabajo en el campo de los derechos humanos y la democratización nacional. Se trata de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Acuerdo Nacional para

sentimiento de dignidad ciudadana que, con la profundización de la crisis económica, terminará por devenir la fuente principal de las reivindicaciones democráticas en el país" (p. 430).

la Democracia (Acude), el Consejo para la Democracia, la Fundación Arturo Rosenblueth, la Convergencia de Organizaciones Civiles para la Democracia, el Instituto Superior de la Cultura Democrática (ISCD) y el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD). El objetivo inicial que alimentaba esta iniciativa era la observación de los comicios federales de 1994.⁴

Existe consenso en que entre los miembros de la Alianza se aprecia una clara distinción: académicos y activistas (Ver Lean, 1996; Ramírez, 1997; López, 1998). Los primeros incorporan las metodologías de trabajo y se caracterizan por no poseer antecedentes de participación política. Los segundos provienen de corrientes con tradición de participación social (ONG, movimientos sociales, CEB, etc.) y de grupos políticos partidistas. Los activistas se han distinguido por una mayor radicalidad ideológica que no se corresponde con la pretensión de rigor científico de los académicos, situación que ha generado tensiones e incluso la salida de muchos de los miembros. En otro sentido, el conjunto de la membresía registra una composición bastante compleja en términos sociológicos,⁵ y una estructura organizativa que

4 En términos coyunturales, podemos decir que la decisión de observar las elecciones de aquel año respondía a dos razones básicas (Ramírez, 1997): evitar a toda costa que se repitiera el sentimiento de frustración popular aparecido después del impugnado resultado de las elecciones presidenciales de 1988, y, en otro sentido, articular una respuesta viable al clima de tensión política que rodeaba peligrosamente aquellos comicios. En una visión de más largo aliento quizás podamos situar el nacimiento de Alianza Cívica como una de las resultantes, o una de las formas de capitalización de una emergente movilización ciudadana, que a decir de varios autores (por ejemplo López, 1998), da cuerpo a un nuevo ciclo de acción colectiva en el país. En una perspectiva global, Alianza Cívica es una expresión de la expansión del concepto y la práctica de los derechos humanos en el mundo. Es en este sentido que destaca el papel que la ética hegemónica internacional ha jugado en la formulación de las reglas del juego en los campos de derechos humanos y la democracia en México, estimulando con ello la práctica de la observación electoral. Por tanto, este actor obtiene su legitimidad, a la vez que de la creciente pérdida de fe en el sistema político, del ambiente prevaleciente en el orden internacional.

5 A principios de 1996 la membresía activa de la organización se estimaba en un número de 2 mil, pero su capacidad de movilización ascendía a entre 16 mil y 40 mil

alterna eficazmente periodos de latencia y otros de visibilidad que permite contar con una militancia general que no es rígida, única ni permanente. Es por esta razón que Lean (1996) nos habla de una estructura que funciona a semejanza de un globo: respira y se expande; se desinfla para conservar energía y recursos en los intervalos de tiempo entre sus actividades.⁶

La vida de Alianza Cívica ha recorrido varias fases (Ramírez, 1997). La primera comprende de abril de 1994 hasta finales del mismo año, y está delimitada específicamente por la observación de los comicios federales. La segunda abarca el año de 1995 y gira en torno de los esfuerzos de: 1. Dar voz a la ciudadanía, 2. Vigilar a los funcionarios públicos y 3. Contribuir a la educación cívica de la población. La tercera inició en 1996 y tiene como pretensión lograr el fortalecimiento institucional de la organización mediante la coordinación de las agendas locales y la nacional, y por medio de la puesta en marcha de programas de capacitación y comunicación interna.

personas, y su poder de convocatoria oscilaba entre 400 mil y un millón de personas (Lean, 1996). En términos generales, los integrantes de la organización provienen de sectores medios, ilustrados, de la población, con perfiles ideológicos, políticos, religiosos y etéreos sumamente plurales, destacando sin embargo, la presencia de miembros de entre 20 y 30 años, con formación universitaria y con vínculos partidistas con el PRD, el PAN y el PRI, principalmente, así como un elevado porcentaje de integrantes sin participación política previa. En cuanto al universo de organizaciones que acuden a los llamados aliancistas, las variaciones son significativas: a la observación electoral de 1994 acudieron 415 agrupaciones (Ramírez, 1997); en tanto que para finales de 1995 y principios de 1996, las Alianzas Cívicas locales reportaron mantener relaciones con 120 de ellas (Lean, 1996).

6 Una modalidad organizacional como la aliancista permite pensar en un fenómeno de distanciamiento entre la dimensión de la identidad colectiva y la identidad individual. Cuando hay una pluralización creciente de las expectativas individuales y una multiplicación también creciente de los espacios de interacción colectiva (fragmentarios), la experiencia individual tiende a ser más fugaz. En consecuencia hay una necesidad de compromiso no adscriptivo sino reflexivo de parte de cada individuo, lo que da la posibilidad de incorporar cada vez más consideraciones de tipo ético y estratégico.

Para 1996 la organización vivió un debate crucial respecto a si aceptaba o no el estatuto de Agrupación Política (AP) para participar en los comicios federales intermedios del año siguiente. En esta discusión se enfrentaron dos posiciones fundamentales. Una que no quería insertarse en el sistema político, para mantenerse como una instancia orientada sobre todo hacia la ciudadanía, con capacidad y autonomía suficientes para vigilar el comportamiento del sistema; otra, sostenía que era posible aprovechar la reforma electoral para participar, empujando desde adentro del sistema político nacional hacia su democratización. La posición que prevaleció fue la favorable a obtener el registro. Este desenlace inicial y el tono de la discusión, produjeron la salida de algunos de sus miembros, incluso de la dirección nacional. Sin embargo, cuando el gobierno estableció las condiciones definitivas por cubrir para obtener el registro como AP, los miembros de Alianza Cívica reconsideraron su decisión, pues aceptar los términos de la reforma implicaba un cambio radical de la naturaleza de la organización. Así, renunciaron a la posibilidad de participar en los comicios para asegurar la continuidad de su proyecto original. Después de ese periodo crítico, Alianza Cívica ha concentrado su atención en la observación de procesos electorales locales (y este año 2000, al proceso federal para elegir presidente, diputados federales y senadores de la República), a la vigilancia de ciertos funcionarios públicos, a su programa de educación cívica y a la publicación de su boletín semestral.

b) Un estado de la cuestión sobre Alianza Cívica

En uno de los primeros textos sobre esta acción colectiva, Sharon Lean (1996) aborda el caso de Alianza Cívica desde la perspectiva del “Tercer Sector”, enriquecida con algunos elementos de la sociología de las organizaciones que concibe a la organización como sistema abierto. En el

citado análisis, la autora intenta observar cómo Alianza Cívica produce acción colectiva en la búsqueda de la democratización, entendida ésta como un bien público. Los criterios del análisis se centran primordialmente en un *eje ecológico* (ambiente externo e interno del sistema), uno *estructural* (sobre todo la capacidad de adecuación a las variaciones ecológicas) y uno *sociopsicológico* (deteniéndose en los incentivos selectivos). Más precisamente, intenta percibir cuáles son los procesos referidos a los temas de los recursos, mecanismos de legitimación e influencia de la organización en el ambiente.

Con una tesis general de partida cuestionable, el estudio consigue, sin embargo, hacer una aguda problematización sobre el fenómeno. La tesis a la que hago referencia sostiene que la centralidad lograda por muchas ONG responde a un mecanismo sistémico compensatorio que les permite cubrir ciertos espacios “dejados vacíos” por el Estado y el mercado. De ahí la denominación con que, no sin problemas, se agrupa y clasifica a este tipo de acciones: el Tercer Sector. Lean sostiene, olvidando completamente el carácter “reclamado” de la apertura de tales espacios, que son los fracasos o límites del mercado y el Estado para promover ciertos bienes públicos, lo que permitió que las ONG pasaran de tener una incidencia microsocia en el decenio de 1980, a alcanzar una densidad nacional. A través de la formación de amplias redes organizativas, muchas ONG lograron convertirse en interlocutores del Estado al conseguir una importante extensión y, a la vez, rapidez de acción.

Respecto de los resultados obtenidos en el estudio, la autora afirma, primero, que el incentivo clave es el prestigio. Señala también que los intereses se basan, inicialmente, en la protección de la familia contra el fraude y la impunidad, y después, en las ideas de paz, transición, democracia, justicia y tolerancia; todo esto a partir de una construcción básicamente local. En tercer lugar, la identificación de los

individuos con la organización se finca notablemente en sus principios rectores, los cuales se manifiestan a través de un mensaje fuerte y capaz de movilizar a su personal, a su membresía y a “la opinión pública”. Esta cualidad repercute en el fortalecimiento de la identidad del individuo al nutrir su autopercepción con una imagen positiva del grupo en el que interactúa. No se trata, pues, ni de mero altruismo ni sólo de cálculo racional. Es, en todo caso, una compleja combinación de ambos registros.

En la perspectiva de la autora, la lógica sistémica de Alianza Cívica es en cierta medida autoritaria debido, entre otros, a los siguientes factores: la adecuación —en algún sentido inercial— al sistema político nacional, la dinámica propiciada por su tamaño, el carácter heterogéneo de su membresía, lo esporádico de la participación de la base y el hecho de responder a instituciones financieras que prefieren un liderazgo ejecutivo centralizado. Esto último alimenta una paradoja constitutiva: cómo obtener recursos para funcionar eficazmente y, al mismo tiempo, preservar una condición autónoma en la definición de los proyectos y en la acción. A partir de tal paradoja, emerge el balance sumario del análisis: este actor trabaja para transformar las reglas del juego político, pero sólo puede hacerlo operando con las reglas ya existentes, sujetándose, de alguna manera, a la lógica sistémica.

Por último, en opinión de la autora, los retos de la organización se orientan a la necesidad de una consolidación orgánica que permita rebasar lo coyuntural, para lo cual cree conveniente: 1. Evitar una diversificación temática excesiva que afecte, por cierta dispersión de su acción, la percepción del prestigio y la identificación de sus miembros; 2. Preservar el vínculo con lo local; y 3. Garantizar nuevas fuentes de financiamiento que otorguen más autonomía, legitimidad y flexibilidad (para mantenerse en esta línea resultaría vital la selección adecuada y rigurosa de

los proyectos por impulsar); y, finalmente, 4. La conquista del reconocimiento gubernamental como interlocutor competente y legítimo para potenciar los alcances democratizadores de esta acción colectiva dentro del ámbito político nacional.

Un segundo estudio es el desarrollado, en el año de 1997, por Ariadna Vaca. A diferencia de Lean, Vaca enfatiza el carácter reclamado de los espacios en que se ha insertado la acción de Alianza Cívica. De nueva cuenta, es el enfoque de las ONG el punto de observación elegido. Lo que la autora intenta poner en relieve es el impacto del marco jurídico del sistema político sobre las condiciones de posibilidad de la acción colectiva, entendiendo al mismo tiempo este contexto normativo como respuesta sistémica a dicha acción. Se trata, pues, en sus palabras, de un análisis político-normativo.

Siguiendo a Sara Gordon, considera que la acción de Alianza Cívica se inserta en un importante proceso de activación de las ONG en el país, ocasionado por el sensible debilitamiento del corporativismo como pilar sociopolítico del régimen, así como por los cambios dentro del sistema que fueron desencadenados por la reforma política de 1977. Estos factores estimularon la participación de la oposición en las elecciones y alentaron, a la vez, una participación social y política independiente orientada a hacer valer los derechos humanos y civiles.

Los elementos que favorecieron en definitiva la creación de Alianza Cívica fueron, para ella, la crisis de los mecanismos de transmisión pacífica del poder en 1988 y 1994, la aparición del EZLN en Chiapas y una percepción generalizada de descomposición del sistema político. La conjunción de estos acontecimientos obligó a la élite dominante a dejar espacios a la oposición y a la ciudadanía, intentando con esa medida preservar el orden y revestir de legitimidad los resultados electorales federales de ese año. En otras

palabras, la competitividad electoral y la desconfianza en los resultados de los procesos electorales y en los propios partidos políticos, pivotearon de manera definitiva una organización ciudadana que venía gestándose en distintos lugares del país y desde vertientes de acción social y política diversas.

La novedad que Vaca descubre en la experiencia de la observación electoral de Alianza Cívica, respecto del resto de iniciativas del mismo tipo en el mundo hasta ese momento, es que fueron mexicanos quienes diseñaron los proyectos y metodologías de observación, mientras que las financiadoras internacionales se circunscribieron a complementarlos o a proponer sugerencias puntuales.

El trabajo concluye con la afirmación —demasiado severa—, de que las reformas electorales revisadas fueron diseñadas, en última instancia, a conveniencia del partido oficial, en su esfuerzo por recuperar legitimidad. Por su parte, las ONG dieron validez y sustento al proceso de 1994, evitando una desestabilización que no era conveniente ni para el país ni para los mercados internacionales.

Así llegamos a otro de los textos fundamentales publicados sobre Alianza Cívica. En éste, Juan Manuel Ramírez Sáiz (1997) pone a nuestra consideración una interpretación basada en la perspectiva de los movimientos sociales, caracterizando la multiplicidad de organismos que dan vida a la alianza como un movimiento ciudadano. Es decir, en esta interpretación hay tres ejes conceptuales en juego: el movimiento social, la democracia y la ciudadanía.

Brindándonos uno de sus habituales ejercicios de precisión conceptual, Ramírez Sáiz define al ciudadano como aquel individuo que no se reconoce como súbdito, sino como sujeto de derechos (sociales, civiles y políticos). Para él, la ciudadanía implica, en un sentido general, la práctica de una vida responsable, activa y comprometida que permite que las relaciones sociales, el poder y las instituciones pú-

blicas funcionen con base en un Estado de derecho. De este precepto básico emanan como valores fundamentales la responsabilidad, el pluralismo y la tolerancia.

Respecto del tema de la democracia, Ramírez recuerda la gran diversidad de acepciones que esta idea pone en juego, y muestra también la conveniencia de intentar considerarlas a todas en el momento del análisis. Así, nos recuerda las distinciones entre democracia formal y sustancial, directa y representativa, liberal y radical, elitista y pluralista, como sistema y como pacto.

Acerca del tercero de los ejes conceptuales anunciados, el autor opta por asumir a Alianza Cívica como uno más de los llamados Nuevos Movimientos Sociales, en este caso, de corte ciudadano. Siguiendo su planteamiento conceptual, el sociólogo mexicano califica a Alianza Cívica como un nuevo tipo de movimiento en construcción. Se trata de un actor con:

Objetivos y programas directa y explícitamente democráticos, estructuras flexibles, incluyentes y eficaces, así como planes de acción puntuales (es decir, temporales y parciales) que cuentan con amplio consenso social (1997:50).

Las aportaciones concretas y muy variadas de esta experiencia son —a su parecer— la revalorización del voto y de la necesidad de consolidar reglas equitativas en la competencia electoral, el impulso y el ejercicio de las formas de democracia directa, la contribución al desarrollo de una conciencia exigente ante la responsabilidad de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones y una importante participación en la educación democrática de la ciudadanía.

El último de los textos de que me he valido para dibujar el estado de la cuestión sobre Alianza Cívica es la investigación de Luis López (1998). En ella se ensaya un acerca-

miento analítico que explora el fenómeno desde la perspectiva de los imaginarios sociales.

López parte de la tesis de que la construcción imaginaria de la ciudadanía es el paradigma que articula actualmente el espacio simbólico de la participación social. En sus palabras: “Es el nodo que articula universos simbólicos que buscan hegemonizar la dimensión cultural y moral del espacio público-político ” (1998:16). Este imaginario emerge como resultado del agotamiento de los referentes simbólicos con que se habían orientado los movimientos populares en las décadas de 1970 y 1980. El nuevo estado de cosas corresponde —en su opinión— a la segunda fase de un ciclo de movilización social iniciado en 1985 con la ruptura de los movimientos urbano-populares y cristianos respecto de sus referentes imaginarios históricos. Esta ruptura implicó el traslado del énfasis al factor ciudadano y la dilución del ingrediente popular. Es por esa razón que, paradójicamente, la presencia del EZLN contribuyó de manera fundamental a la revitalización de las ONG de derechos humanos y de las agrupaciones cívicas, y no a la de los movimientos y grupos populares y cristianos de base que originalmente le sirvieron como fermento, paradoja que terminó por depurar el imaginario ciudadano del elemento popular. Ahora es, en definitiva, la concepción de lo cívico lo que viene a prefigurar el universo simbólico de la acción colectiva.

Los discursos de lo ciudadano que dan vida al nuevo imaginario dominante, son el del reconocimiento al derecho a la ciudad (el caso de Asamblea de Barrios), el de la lucha por “el derecho a tener derechos” (es decir, como un modelo cívico de convivencia, participación, forma de vida, compromiso, y de reconocimiento del potencial político de lo no estatal ni partidista), y el que sostiene la emergencia de un sujeto social nuevo (capaz de estimular el cambio político a través del fortalecimiento de la vida partidista y el estable-

cimiento de reglas claras en la competencia entre esos organismos).

En todo este proceso, Alianza Cívica participa de manera fundamental en la expansión y consolidación del imaginario ciudadano mediante su labor de observación, educación cívica, seguimiento del desempeño oficial de funcionarios y el apoyo a una multiplicidad de acciones de orientación cívica. Al mismo tiempo, la organización va definiendo una identidad colectiva anclada, precisamente, en el eje simbólico de la ciudadanía. La discontinuidad de imágenes aportadas por las muchas organizaciones que la nutren —muchas de las cuales tienen una inspiración social popular y colectivista—, ha sido procesada por un discurso que ha llevado, de un planteamiento inicial estrictamente “postmaterial”, a la incorporación de reivindicaciones más o menos concretas que ponen en juego problemas de orden particular. La construcción del nuevo horizonte de aspiraciones e intereses se ha realizado paulatinamente a través de prácticas cotidianas que van sedimentando experiencias sociales de larga data y que estructuran en el acontecer diario los comportamientos colectivos y los procesos de significación del universo simbólico de los participantes.

Al abordar el carácter peculiar de la constitución identitaria de Alianza Cívica, López añade que se trata de una identidad colectiva de segundo orden que incluye en su seno a una red de identidades colectivas más pequeñas. En cierto sentido, la identidad mayor opera como instancia de visibilización de las identidades más acotadas y, por tanto, no parte de un referente territorial como eje de adscripción primario, ni implica un compromiso permanente. Se trata pues, a su parecer, de una modalidad identitaria inédita dentro de la acción colectiva nacional. Hecho este breve recorrido, pasemos ahora a la revisión de la otra acción colectiva que nos interesa: el barzonismo.

c) Los deudores de la Banca se organizan

El Barzón es la denominación con la que se reconocen una amplia gama de organizaciones locales, regionales y sectoriales de deudores de la banca que han caído en situación de cartera vencida, las cuales se integran en El Barzón Confederación Nacional y El Barzón Unión Nacional. El Barzón⁷ original (el Confederación) fue una organización constituida en 1993, en Guadalajara, Jalisco, aglutinando sobre todo a pequeños ejidatarios de 12 estados del país (Torres, 1997), de entre los cuales sobresalían Jalisco, Chihuahua y Zacatecas. Con el transcurso del tiempo, dos fenómenos llevaron a que el conjunto de esta movilización en expansión y consolidación permanentes desbordaran los límites de la organización original.⁸ Por un lado, tenemos la escisión que vivió El Barzón Confederación Nacional⁹ de

7 El escenario en que esta nueva organización aparece comprende importantes procesos en los ámbitos económico, político y cultural. Entre los primeros destaca la exclusión, como agentes estratégicos, de amplios sectores de productores y empresarios del campo orientados al mercado interno, e inclusive la marginación de algunos agroexportadores (Rubio, 1996). Lo que parece estar de fondo en este proceso es la estrategia gubernamental de integrar al sector primario con los sectores agroindustrial y de prestación de servicios (Carton, 1996b), modernizándolo a costa de su desnacionalización y del desplazamiento de parte de su mano de obra a otros sectores de la economía o, de plano, al subempleo. En el orden de la política podemos considerar como una de las características principales del periodo, la erosión de la legitimidad del corporativismo oficial en el campo (Mestries, 1995), situación que propició importantes cambios en los sistemas de representación, sobre todo en el sector de la pequeña propiedad (Carton, 1996b); en sentido opuesto, encontramos también el extendido proceso de desmantelamiento de gremios autónomos por parte del Estado. En el plano cultural, se fue acumulando poco a poco una serie de aprendizajes que alimentaba, muchas veces desde lo local, el repertorio de acciones, demandas y símbolos del que se nutrió la constitución de El Barzón. Este elemento generó la "necesidad espiritual de cambio" (Mestries, 1995) en muchos productores rurales e hizo posible la articulación de los factores enunciados.

8 Esta expansión se ilustra con el crecimiento extraordinario de la membresía: de 10 mil integrantes en 1993, pasó a cerca de un millón en 1997 (Torres, 1997). Para este año, sin embargo, alrededor de 80 % de los miembros del Barzón Unión eran deudores de la ciudad (tarjetahabientes, comerciantes, transportistas, productores de masa para tortilla, artistas, deudores de crédito hipotecario, etc.) (Ibíd.).

9 La disputa entre los dos principales dirigentes barzonistas, Quirino Salas (ex-líder estudiantil zacatecano) y Maximiano Barbosa (miembro de la burguesía rural

un amplio sector de sus miembros, encabezados por Quirino Salas, quienes conformarían El Barzón Unión Nacional en octubre de 1994, en Monterrey, Nuevo León. Esta fractura dentro del barzonismo propició el descentramiento de su dinámica y su estructura, fenómeno que se vio acelerado, sobre todo, con el giro urbano, la sectorialización y el desarrollo regionalizado de El Barzón naciente. Podemos afirmar que esta mutación afectó al conjunto de la movilización, repercutiendo, por un lado, en el aumento acelerado de la membresía barzonista, la diversificación de sus demandas¹⁰ y su politización; y por otro, superando la lógica clientelar que generalmente rige las relaciones sociales en el campo mexicano, a la vez que enriqueciendo su repertorio de formas y ámbitos de escenificación,¹¹ así como los

jalisciense), condujo a la ruptura definitiva. El primero era partidario de la moratoria total de la deuda y de una actitud de confrontación ante el gobierno federal, así como de la apertura de la organización hacia la ciudad; el segundo era más proclive a la concertación y a mantenerse como una movilización agraria (Torres, 1997).

10 La demanda inicial era la moratoria de los adeudos. Posteriormente habrían de añadirse, entre otras cosas, la reformulación, desde bases democráticas, de la política agropecuaria, la revisión de ciertos aspectos del TLCAN, una nueva política de subsidios y nuevos precios de garantía, la reactivación del financiamiento a través de la creación de una ley de crédito rural, nuevas disposiciones civiles y penales contra las prácticas de la usura y el anatocismo, la revisión de los términos de la reforma al artículo 27 Constitucional, etc. Recientemente, las baterías barzonistas han estado enfiladas —sin éxito— contra la aprobación del Fobaproa y el IPAB en el Congreso de la Unión, debido a que ambas iniciativas a todas luces encubren un sinnúmero de irregularidades en el proceso de privatización bancaria, de ilícitos en los procesos de asignación de los créditos, así como por la sangría que dicha aprobación significa para el país.

11 La movilización avanzó de la siguiente manera: 1. Las manifestaciones directas no violentas en las calles y afuera de los palacios de gobierno locales, solicitando la mediación presidencial en el conflicto con los banqueros y el agio; 2. La lucha en los tribunales, combinando la estrategia de "pagar lo justo" con el desconocimiento masivo de la personalidad jurídica de los bancos que fueron creados fuera del plazo constitucional establecido durante el proceso de privatización, y consecuentemente, desconociendo los adeudos mismos; 3. La lucha parlamentaria contra la política económica del gobierno federal, para superar el *impasse* en su conflicto con los banqueros, el agio y ciertas dependencias de gobierno, y dar así una solución definitiva al problema de las carteras vencidas, así como para pugnar por medidas globales que reactiven el conjunto de la economía nacional.

tipos de propuestas de solución formuladas,¹² al incorporar, como insumos simbólicos, múltiples elementos provenientes de la tradición de lucha social en las ciudades.

Por otro lado, observamos los efectos “heterogeneizantes” que tuvo la decisión de los barzonistas de asumir una estrategia política partidista diferenciada.¹³ Esta estrategia los obligó a llevar a cabo ciertas definiciones políticas que introdujeron fuertes diferencias al seno de la movilización;¹⁴ aunque, al mismo tiempo, les permitió mantener y atraer a sus filas a deudores con preferencias partidistas distintas. Esta tensión representa potencialmente una de las fortalezas y/o una de las debilidades más importantes del barzonismo, según sea la capacidad política que éste tenga para dotar de una direccionalidad básica al conjunto de la movilización, y para aprovechar el margen de manobra que introduce la posibilidad de una pluralidad tal de alianzas.

Si bien en el origen de la producción de la identidad barzonista está la situación de exclusión vivida por vastos secto-

12 Las propuestas barzonistas incluyen, entre muchas otras, la idea de un padrón nacional de productores barzonistas, la creación de un banco nacional de fomento popular, la implementación de proyectos productivos autónomos, la instrumentación del Fideicomiso para la Concordia (medida que busca dar una solución global a la crisis de las carteras vencidas), hasta la creación del Barzón Latinoamericano, espacio desde el cual, incluso los gobiernos latinoamericanos podrían sumarse a “barzoner” contra el FMI y el BM, responsables de fondo de la situación económica de nuestros países.

13 A pesar de haberse planteado una estrategia multipartidista, han prevalecido los vínculos con el PRD (el Barzón Unión) y con el PRI (el Barzón Confederación), aunque también se registran contactos relativamente marginales con el PT y el PVEM. En estados como Guanajuato, el contacto con el PAN ha sido bastante importante.

14 En diciembre de 1999, los medios de comunicación anuncian que los viejos rivales, Quirino Salas y Maximiano Barbosa presentan su respaldo a la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, aspirante priista a la presidencia de la República, en tanto que el actual dirigente de El Barzón Unión, Alfonso Ramírez Cuéllar se mantiene como diputado federal perredista y apoya la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la máxima magistratura del país por este mismo partido. Ante estas circunstancias, múltiples organizaciones sectoriales o locales se han deslindado en los hechos de las decisiones políticas asumidas por los líderes nacionales barzonistas, para centrarse en el trabajo estrictamente no-partidista.

res del campo nacional,¹⁵ las transformaciones en la composición socioeconómica y cultural de la movilización, sus modalidades de estructuración y actuación, y las formas y niveles de politización que ésta vivió, atestiguan tres importantes fenómenos: a) la desruralización del conjunto de la movilización (no obstante que la emblemática básica permanezca: el nombre, la imagen del tractor, la continuidad simbólica entre hacendados y banqueros y agiotistas, y entre peones acasillados y deudores, etc.), b) el desacoplamiento entre la organización y la acción colectiva (el *barzonismo* no es igual a uno de los barzones o a la simple sumatoria de todos ellos), y finalmente, c) el desacoplamiento entre la identidad del *barzonismo* y los barzones nacionales. Por lo tanto, si podemos hablar del *barzonismo* en estos términos, es debido a que las distintas organizaciones que se autorreconocen formando parte del mismo reactivan desde la informalidad redes de significados básicos compartidos, adquiridos y reproducidos como parte de la simbólica, la emblemática y la mítica presentes en la memoria de la movilización, los cuales adquieren capacidad articuladora legítima en los momentos de visibilización pública coordinada.

d) Un estado de la cuestión sobre El Barzón¹⁶

El primer análisis sobre El Barzón fue publicado en 1994. Con una visión marcadamente estructuralista, Enrique

¹⁵ Esta exclusión ocurrió concretamente a través del deterioro de los términos de intercambio comercial como consecuencia de: la apertura indiscriminada de la economía en el contexto de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; la severa retracción y encarecimiento del crédito agrícola privado y público que introducía condiciones financieras severas y selectivas, y del aumento de precios de los servicios requeridos para la producción. Todo esto terminó con la aspiración de una importante franja de productores agrícolas de modernizarse, arrojando como saldo rojo el explosivo problema de las carteras vencidas.

¹⁶ Debo aclarar desde este instante que todos los trabajos revisados eligen hablar de El Barzón y no del barzonismo, concentrándose particularmente en el caso de El

Velázquez y Alejandro García tienen el mérito de elaborar los primeros esbozos de esta acción colectiva. Mostrando una radiografía rica en datos respecto del contexto económico en que aparece y sobre su composición inicial, los autores ofrecen en su análisis cuatro ideas básicas: 1. El Barzón es un movimiento que surge en oposición al proyecto salinista de modernización, 2. En esencia, es una alianza de pequeños propietarios y ejidatarios para reconstruir sus condiciones de producción, 3. Se perfila como un organismo que reivindica una lógica de movilización autónoma, y 4. Su impacto tiende a modificar la correlación de fuerzas en el sector rural nacional, uno de los bastiones tradicionalmente estratégicos para el sistema político.

Otro de los trabajos pioneros, con pretensiones analíticas más elaboradas, es el ya citado de Francis Mestries (1995). El autor parte de la perspectiva de los movimientos sociales, y asume una posición más compleja respecto de los determinantes del movimiento, incorporando la variable política como mediación entre las causas económicas y la acción social. Después de hacer una reconstrucción del movimiento siguiendo la metodología propuesta por Touraine y Pozas, llega a la conclusión de que El Barzón es un movimiento que se ve jaloneado por dos tendencias contradictorias y complementarias, tematizadas desde hace tiempo por Sergio Zermeño al hablar de las acciones colectivas en México: la cooptación corporativista (o *buropolitización*) y el confrontacionismo suicida.

La mayor virtud de este trabajo consiste en la ponderación del factor político. Al dar cuenta de la tensión existente entre la tendencia a la cooptación y la tendencia al suicidio, penetra de lleno en uno de los nodos de la producción y permanencia de la acción colectiva: el trabajo que es necesario realizar para intentar articular las lógicas estratégi-

Barzón Unión, por ser el que alcanzó un desarrollo y una complejidad organizacional mayores.

ca, integrativa y de subjetivación a las que se enfrentan los individuos concretos, en este caso en un sistema político profundamente autoritario y corporativista.

Otros trabajos también sugerentes han sido escritos por Gabriel Torres (1997, y con Guadalupe Rodríguez, 1996). Ensayando un enfoque microsociológico ya anunciado en un texto anterior (1994), Torres insiste en la pertinencia de analizar los fenómenos sociales (o al menos cierto tipo de ellos) asumiéndolos como una serie de combinaciones concretas, cotidianas, fluidas y cambiantes de conductas de resistencia, consenso y escapismo que van prefigurando ciertas continuidades y discontinuidades en la vida diaria, montadas en redes múltiples de interacción social.

Con la anterior premisa en mente, en el trabajo elaborado con Guadalupe Rodríguez se dedica a explorar, a través de los sucesivos conflictos y negociaciones entre agroproductores, Estado mexicano y sistema financiero, cómo es que el plano empírico de lo cotidiano sirve de base para el diseño de las políticas macro; cómo, en un segundo momento, estas políticas propician la aparición de un movimiento que permite cuestionar lo global desde lo local; y finalmente, cómo se reconfiguran las políticas en esa dinámica dialéctica.

En un trabajo posterior, más completo y sugerente, debido quizás al propio desarrollo de la misma movilización, Torres (1997) incursiona en la dimensión de la producción de la subjetividad barzonista, dimensión poco presente en su anterior análisis. Enriqueciendo su visión micro con la propuesta de la democracia radical presentada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sostiene que: “La expansión y multiplicación de sujetos fragmentarios parciales y limitados que entran en el proceso colectivo de la toma de decisiones” (Laclau citado por Torres:285) contribuyen a la multiplicación de espacios públicos, lo cual es clave para generar una “alternativa democrática radicalizada”. Ahora el interés del autor está centrado en localizar, mediante una vi-

sión “de abajo a arriba”, las distintas lógicas presentes en los discursos y acciones cotidianos de los barzonistas (alternativa, resistencia, sobrevivencia, negociación, desentendimiento), dando cuenta de cómo se expresa el conflicto en la definición del proyecto-estrategia y los avances que se van tejiendo; señala, al mismo tiempo, las discontinuidades entre la producción retórica y la práctica barzonistas. Se trata, en síntesis, de detectar las lógicas prácticas y de razón que se mezclan en diferentes posibilidades y circunstancias, como camino para hurgar en el potencial de la movilización pragmático-inmediatista producida ante la iniciativa estatal.

El rasgo distintivo de El Barzón, según Torres, es la producción de signos identitarios asociados con la ocupación de espacios en la arena pública y el fuerte simbolismo de sus acciones. Para él, la mejor manera de entender la identidad es en la relación de confrontación con un oponente, tal y como lo establece la sociología de la acción touraineana. Sin embargo, al hablar de lo que está en juego —la totalidad— se remite más que a orientaciones culturales, a espacios de acción; así, lo que para él está en disputa es la apropiación de espacios cotidianos, de círculos de discusión intelectual, mediante los cuales se produce cierta simultaneidad comunicativa de lo que de manera fragmentada ocurre a lo largo y ancho del país.

Al hacer su balance sobre este actor, Torres sostiene que sus principales aportes son: 1. La detección de disposiciones financieras que constituyen una amenaza para los derechos humanos y civiles; 2. Defender la idea de que las condiciones de vida de la mayoría de la población representan un derecho social prioritario; 3. La apertura de nuevos espacios de negociación política apelando a la defensa del patrimonio familiar, lo que tiene un fuerte impacto sobre las fronteras que existen en el país entre lo público y lo privado y sobre los contenidos de los derechos políticos. Para

él, la opción que El Barzón persigue es la de la radicalización de la democracia política como antídoto contra la exclusión y para ensanchar los márgenes de participación. Esta alternativa es, en su opinión, el anuncio de escenarios de acción por venir para los movimientos sociales mexicanos del siglo XXI.

A diferencia del enfoque micro de los análisis de Torres y Rodríguez, Ana Machuca (1997) nos ofrece una perspectiva de tipo sistémico-estructural que asume a los movimientos sociales, a la manera de Alberoni, como respuestas cíclicas a las discontinuidades dentro del sistema social. Otro referente teórico central es la producción primera de Alberto Melucci. Como él, Machuca interpreta los cambios del sistema como una necesidad de controlar las contradicciones estructurales que lo atraviesan, y en los que se insertan las conductas colectivas, acelerando las transformaciones y creando nuevas contradicciones.

La estrategia elegida por ella consiste en establecer la correlación entre los modelos de desarrollo implementados por el Estado y los efectos estructurales que éstos tienen. En concreto, busca esclarecer el vínculo entre las políticas económicas y financieras en vigencia y la acción colectiva emergente o en desarrollo. Esta relación es entendida como mediada por procesos político-electorales, relaciones corporativas y fenómenos específicos de legitimación.

El origen de El Barzón es explicado a partir de la concurrencia de tres elementos de orden estructural y una coyuntura desencadenante: se trata del encuentro de la crisis estructural del campo que data del decenio de 1960, la implementación de la política neoliberal y la crisis del sistema político nacional, que se hicieron espectacularmente visibles con la crisis financiera de finales de 1994. Por lo tanto, el movimiento emerge como respuesta a la crisis global, más que a la coyuntura específica anunciada, actuando además bajo el influjo de las condiciones estructurales y

de las medidas gubernamentales que determinan su temporalidad y, en cierto sentido, su direccionalidad.

Como conclusiones del análisis, propone que El Barzón es un movimiento social con una base social inédita que pasa de ser reivindicativo, con demandas fundamentalmente económicas y situadas en el nivel de la organización social, a ser otro de tipo reivindicativo político que cuestiona los límites del sistema y se enfoca contra la política económica del gobierno. Se trata de un actor con capacidad propositiva en el plano nacional, que intenta participar en la definición de la política agropecuaria, vertebrando un frente social y productivo en lucha por cambiar el modelo de desarrollo nacional y por mostrar las carencias existentes en varios de los sectores económicos del país, y que recientemente ha sido capaz de conformar una representación propia en el Congreso.

Al considerar que la situación de crisis sistémica no parece revertirse, afirma que El Barzón seguirá vigente. El reto fundamental del barzonismo es, en su lógica, lograr la institucionalización de sus demandas, politizándose —por medio de una estrategia de alianza multipartidista y no corporativa— sin difuminarse en el sistema. Vale la pena añadir que hay en este trabajo un interesante esfuerzo por establecer la correlación entre los giros de la organización y los cambios en la configuración del entorno político.

Por último, el trabajo al que me interesa remitirme ahora es el elaborado por Heather Williams (1997). Partiendo del enfoque de la movilización de recursos, Williams intenta responder a la pregunta de qué ha hecho de El Barzón una movilización viable en un ambiente adverso y con condiciones de insolvencia económica interna. Sobre todo, pretende comprender el problema del reclutamiento y la permanencia de los miembros a la luz de una relación costos-incentivos desfavorable en términos de beneficios estrictamente materiales.

Williams hace explícita su intención de buscar respuestas a la nueva cara de El Barzón, que para ese año no era ya un movimiento agrario. El giro radical en la composición barzonista la lleva a argumentar que este actor constituye la culminación de la movilización civil que emergió en la década de 1980 contra la caída del poder adquisitivo de los consumidores y que se vio catalizada con la crisis de 1994, la cual provocó un malestar generalizado.

El ambiente que desde esta óptica nutrió la aparición de la organización de deudores, comprende la importante reacción de las clases trabajadoras, la pequeña burguesía, las clases medias y aun de círculos empresariales que vieron afectado su poder adquisitivo como consecuencia de los desventajosos programas de integración comercial con países más desarrollados.

No obstante la existencia de condiciones adversas para la organización, El Barzón emergió y se desarrolló gracias a innovadoras estrategias que fueron capaces de articular a productores del campo y la ciudad, convenciéndolos de que la participación en este organismo revestía de honorabilidad y justificaba convincentemente el empleo de tiempo y dinero con ese propósito. Un elemento clave que dio resonancia a esta estrategia fue la capacidad para aprovechar los recursos mediáticos a su alcance, lograron con ello extender significativamente la cobertura de su protesta.

Contando entre sus filas con un gran número de élites regionales de todo el país, El Barzón abrió su convocatoria a la ciudadanía entera ofreciendo a la vez incentivos de corto plazo (particularmente, la defensa del patrimonio familiar) y pugnando por la preservación de la producción nacional e incluso de “la familia mexicana”. Para Williams, son los ingredientes retóricos de la salvación nacional y la justicia social los que aportan los anclajes identitarios y éticos que complementan el cálculo estratégico de los miembros y que explican su permanencia y el crecimiento de la organización.

En síntesis, Williams nos propone una serie de factores *push* y otra de factores *pull* para entender el surgimiento, auge y transformación de El Barzón. Los factores *push* son principalmente la ira de las clases medias y de los agroproductores por la bancarrota a que llevó la devaluación de 1994. Por su parte, los factores *pull* son, fundamentalmente, una retórica pública ciudadana que logra convencer de que la participación en El Barzón es segura, ética y patriótica, y articulada con ésta, la capacidad de otorgar protección efectiva a los miembros.

Al hacer un balance sobre el estado de la organización en ese momento, Williams considera que este actor representa un claro ejemplo de *lobbying* ciudadano como forma viable de participación política. En su opinión, el movimiento barzonista ha logrado, por las vías enunciadas, incorporar importantes sectores de las clases medias, conformando redes ciudadanas que pueden reactivarse en otros momentos. Se trata de un actor nacional pionero en la instrumentación de algunas formas de movilización y que actualiza otras más, provenientes, entre otros ámbitos, de la experiencia de las organizaciones vecinales. Por otro lado, esta acción colectiva presenta una importante modificación en el perfil tradicional del liderazgo social, incorporando a muchas mujeres en sus niveles directivos. Finalmente, destaca sobremanera la capacidad desarrollada para activar solidaridades entre hombres de negocios y trabajadores, lo que representa una verdadera novedad en el terreno de la acción colectiva en México.

Alianza Cívica y El Barzón, ¿dos sobrevivientes del naufragio?

Resulta interesante remarcar que, al adentrarnos en el tipo de relaciones existentes entre lo social organizado (en este caso, a través de las experiencias concretas de Alianza Cívica y el barzonismo) y la política, constatamos la reite-

ración del fenómeno de la buropolítica sobre el que tantas veces ha insistido Sergio Zermeño para pensar el caso mexicano. Por ejemplo, Alianza Cívica vivió quizás su episodio más crítico al enfrentar la posibilidad de participar en los procesos electorales con el estatuto de AP, sufriendo como consecuencia de la disputa interna a que la discusión sobre ese tema dio lugar la pérdida de numerosos cuadros dirigentes, medios y de base. Por su parte, el barzonismo se vio involucrado directamente en la dinámica político-electoral en la búsqueda de una palanca que le permitiera superar el *impasse* en el que se encontraba su conflicto: los barzonistas se dividieron como consecuencia de la confrontación entre las dos inclinaciones políticas prevalecientes en su interior, una de las cuales (el grupo cercano al perredismo, en ese entonces dirigido por Quirino Salas) prácticamente se partidizó al buscar puestos de representación popular en distintos niveles a lo largo y ancho del país, y al decidir establecer un vínculo fuerte y abierto con el Partido de la Revolución Democrática, principalmente.

Hasta aquí los hechos parecen dar la razón a Zermeño: la propensión al vértice de la política, la burocratización de sus cuadros dirigentes y el vaciamiento de las bases repetían cabalmente la lógica fatal de la buropolitización. Sin embargo, también en este terreno pueden rastrearse cambios fundamentales. Por ejemplo, Alianza Cívica fue capaz de sobrevivir a su crisis decidiendo permanecer como asociación civil y renunciando al estatuto de AP, debido, en última instancia, a que el cambio de denominación habría implicado prácticamente la desnaturalización de la organización en relación con sus planteamientos centrales originales. A este respecto recordemos a Alberoni (citado por Ramírez Sáiz, 1998) quien propone que la fuerza de las acciones colectivas contemporáneas radica en la consolidación de su desafío simbólico, así sea a costa de sucumbir o desaparecer antes que institucionalizarse y reproducir las

relaciones corporativistas que rigen la articulación societal contra la que se lucha.

El barzonismo, mientras tanto, fue capaz de entrar directamente en el sistema político a través de la conquista de cargos de representación popular en el Congreso de la Unión y en distintos congresos locales, al amparo del registro de diversos partidos políticos opositores, sobre todo del PRD, sin que eso haya significado, por lo menos hasta hoy, a pesar de todas las desavenencias que esto produjo al interior de la movilización y de la consolidación de ciertas pautas *buropolíticas*, el abandono definitivo de las tareas básicas de la organización, ni en el terreno jurídico, ni en el de la resistencia y la movilización directas.

Otro aspecto de singular importancia dentro del barzonismo es la capacidad de resistencia y distanciamiento crítico de muchas de las organizaciones locales y sectoriales que lo conforman, ante los tumbos que las direcciones de los dos barzones nacionales (el Unión y el Confederación) vienen dando en sus relaciones con el sistema político. De esta manera, la tendencia a la partidización que sí se aprecia en las direcciones nacionales, sobre todo en la de El Barzón Unión, no subsume ni agota al conjunto del fenómeno barzonista. Por el contrario, puede percibirse el fortalecimiento gradual de ciertos barzones regionales o sectoriales a la par del reflujo apreciable en el nivel nacional.

¿Se trata acaso de dos sobrevivientes, debilitados pero aún con vida, del eterno naufragio en el que la cultura política estatista sumía siempre a los actores sociales? Si este fuera el caso, ¿qué ha permitido sortear tan difícil trance? ¿Estos sobrevivientes podrán mantenerse en pie mucho tiempo o terminarán por sucumbir ante la marea del estatismo populista? ¿Es que acaso atestiguan la posibilidad de un tipo distinto de relación entre lo social organizado con *la política*? ¿O una producción más compleja de *lo político*

desde el ámbito social, sobre todo en lo que concierne a la articulación entre las dimensiones integrativa e instrumental de la acción colectiva? ¿Qué tipo de retos plantea esto a los analistas y a los protagonistas de las acciones colectivas en los años por venir?

Por lo pronto, enunciemos los escenarios que Ramírez Sáiz planteaba en 1998 para Alianza Cívica, y Gabriel Torres, en 1997, para El Barzón. El primero sostenía que eran dos las posibilidades más plausibles para el futuro aliancista:

- a) Su progresiva erosión interna y el desdoblamiento de su organización en acciones o programas particulares, y b) su fusión con Causa Ciudadana, lo cual significaría también su desaparición o absorción de facto (1998:64).

Cabe precisar que el autor matiza estos dos grandes escenarios, introduciendo variantes para cada una de las tres grandes regiones del país (norte, centro y sur).

Mientras tanto, Torres consideraba como desarrollos factibles del barzonismo: a) “la extensión y el impacto de las acciones de resistencia civil” (1997:329), b) una mayor presencia barzonista en el ámbito parlamentario “que servirá para impulsar, detener y/o cambiar ciertas propuestas de ley” (Ibíd.), y c) “una guerra retórica prolongada que puede rematar en inmediatas posibilidades de revisión coyuntural y hasta de fondo del modelo económico” (op. cit.:330). Quizás podríamos añadir aquí ciertas tendencias adversas ya presentes en el barzonismo y que es necesario no olvidar: a) la gradual miserabilización económica en sus filas (ver entrevista con Juan Manuel Ramírez, 10/02/00) ante la ausencia de una solución de fondo al problema de las carteras vencidas; b) el avance de una estrategia gubernamental para desarticularlo, por la vía de soluciones parciales dirigidas a grupos focalizados, a la vez que de la negati-

va ante una solución global del problema; c) la mayor partidización de las demandas y de la dinámica de las organizaciones barzonistas, lo que terminaría por cooptarlas definitivamente. Por supuesto, estas tendencias alimentan dos tipos generales de desenlace posible: la extensión de un individualismo exacerbado que conduzca al “sálvese quien pueda”, o la subordinación total de los planteamientos y las lógicas de acción que han constituido a la movilización.

Resulta sin duda difícil proponer conclusiones analíticas precisas sobre las dos acciones presentadas. Así vemos, por ejemplo, que con el empleo de perspectivas teórico-metodológicas variadas y enfatizando distintos problemas de investigación, los diferentes autores y autoras aquí mencionados llegan a definir a Alianza Cívica, como organización, ONG, nuevo movimiento social (ciudadano), red que opera alternativamente como movimiento social y grupo de presión; y a El Barzón (no al barzonismo en el sentido que propongo) como movimiento simplemente, como movimiento social, movimiento reivindicativo inicialmente económico y después político, y movimiento agrario que devino frente ciudadano. Desde luego, cada una de estas designaciones tiene tras de sí importantes argumentos para validarlas, y por supuesto cada una da cuenta de una serie de aspectos efectivamente presentes en el fenómeno. Por mi parte, me contentaré en esta ocasión con expresar algunas ideas básicas.

Alianza Cívica y el barzonismo son acciones que, en mi opinión, se mueven discontinua y hasta simultáneamente en los registros de la organización social y del sistema político. Por ejemplo, Alianza Cívica funciona como grupo de presión, como vocero ciudadano, desarrolla acciones de socialización política fuera y dentro del propio sistema político e interviene en la tematización mediática de la democracia; por su parte, el barzonismo se desenvuelve también en una lógica reivindicativa (defensiva y propositiva), con alternativas productivas que embrionariamente inciden (o

pretendían hacerlo) en la reconstitución de solidaridades sociales restringidas y en la regeneración de algunos sectores —aún pequeños— de la planta productiva de ciertas regiones del país, con una actividad que alterna la intermediación social y política, la acción como grupo de presión, como fuerza política con representantes en cargos de elección popular y, finalmente, con una permanente incidencia en los medios de comunicación.

La evidente complejidad de acciones colectivas como las aquí abordadas nos revela con una claridad igualmente elocuente, a pesar del carácter apenas exploratorio de los juicios arriba expuestos, que las herramientas empleadas, por lo menos desde las variantes accionalistas clásicas, resultan notablemente ambiguas e insuficientes. La necesidad de ensamblar —con rigor— tradiciones sociológicas diferentes es una opción que aparece como cada vez más plausible (Ver Durand, 1999). Asumir una actitud más prudente ante las posiciones normativas es una condición indispensable para liberar a las acciones del peso de lo que desde el análisis sociológico “quisiéramos que fueran” y para indagar más en sus potencialidades aun desde la fragmentación, la discontinuidad y la discreción. Pero, sobre todo, la renuncia a nociones de centralidad para pensar la producción de la sociedad, los conflictos sociales y las acciones que los encarnan, es un requisito imprescindible para tomar distancia del paradigma clásico y para acercarnos a la complejidad inmensa y cotidiana que da vida al devenir de nuestras sociedades.

A manera de conclusión: un esbozo alternativo

Ante la crisis del paradigma clásico y con las radicales transformaciones sociales que se viven actualmente, podemos sin duda afirmar que presenciamos el agotamiento de una forma de pensar-construir lo social que pretendía do-

tarlo de una centralidad que nunca tuvo. Con la irrupción de una multiplicidad de lógicas de acción, de niveles de conflictividad, de orientaciones culturales, en síntesis, de un mundo fragmentario, discontinuo, plural y contingente, no es posible pensar-construir lo social a partir de algún principio central de integración o producción.

Una de las consecuencias que nacen de este nuevo escenario es la necesidad de repensar la naturaleza de la acción colectiva. En lo concerniente a la acción colectiva, asumir la condición descentrada de lo social, permite pensar a las acciones colectivas “no centrales”, no como iniciativas que no alcanzan un nivel óptimo de desarrollo, sino como iniciativas que se corresponden con el carácter fragmentario y discontinuo de la producción social. Esto conduce a un problema clave: la relación con la *historicidad*. A este respecto, quizás sea más adecuado pensar dicho concepto en relación con un ámbito también fragmentario, discontinuo y difuso, y no como la posibilidad de una modelización central que organiza al conjunto social histórico-concreto. Pensar así permitiría pasar de la conclusión de que no hay movimientos sociales con capacidad de incidir en la historicidad, a la pregunta de cómo desde acciones acotadas, más fugaces, menos espectaculares, es posible incidir en la *longue durée*, pero desde la cotidianidad, sobre las formas de autoproducción de la sociedad.

Recordemos brevemente las ideas iniciales de Alain Touraine (1993) sobre este punto. En su opinión, la historicidad es un concepto que nos permite pensar la capacidad de la sociedad para autoproducirse a través de definir sus campos social y cultural. Para él, los elementos constitutivos de la historicidad son, en primer término, el *modelo de conocimiento*, que constituye el sistema simbólico, representacional, creador de una imagen específica del mundo y de determinadas relaciones sociales. El segundo elemento es el *modelo de acumulación*, que representa el

sistema de intervención sobre el funcionamiento material de la sociedad. Por último, encontramos el *modelo ético*, el cual establece el modo de aprehensión cultural que cada tipo de sociedad hace de sus propias formas de producirse.

La idea de historicidad encuentra terrenalidad a través de la de Sistema de Acción Histórica, donde el conjunto de tensiones sociales y culturales al que convencionalmente denominamos sociedad, articula en forma específica los elementos de la historicidad para generar modalidades concretas de movimiento, orden, orientaciones culturales y recursos sociales. A partir de las maneras distintas de relacionar los diferentes elementos de esta matriz, Touraine obtiene los tipos societales siguientes: la sociedad mercantil, la industrial, la programada, postindustrial, denominada más recientemente por él mismo como de la comunicación.

Dentro del esquema touraineano, en el nivel de la historicidad podemos situar varios tipos de actores: movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos históricos y movimientos totales. Mientras tanto, en el nivel de la organización social encontramos acciones conflictivas reivindicativas y administraciones; en tanto que en el nivel del sistema político o institucional se ubican fuerzas políticas, agentes políticos y grupos de presión. De esta manera, cuando Touraine habla de movimiento social alude a una acción colectiva capaz de incidir y disputar los códigos y las orientaciones generales que articulan la modalidad específica de autoproducción social, principalmente en el terreno ético-cultural.

Por supuesto, son muchas las interrogantes que llegan a la mente. Si bien es posible y pertinente hacer una construcción típico-ideal como la expuesta, con finalidades heurísticas, ¿qué autoriza a trasladar directamente a la sociedad concreta (no a los tipos societales) la búsqueda de *modelos* de ética, conocimiento y acumulación? ¿Podemos concebir acaso *un* tipo y dirección de movimiento y orden

social, o *un* tipo de orientaciones culturales y de recursos sociales? ¿Es posible encontrar sólo *uno* de esos tipos societales en las sociedades de carne y hueso? Finalmente: ¿Existen acciones colectivas concretas —no ya actores con un guión y un drama que seguir, ni iniciativas con espontaneidad o racionalidad absolutas— que respondan a esos niveles de producción social en forma exclusiva y central? Sabemos bien que Touraine reconoce reiteradamente que no existen “movimientos sociales” puros; que en éstos siempre estarán presentes elementos que corresponden a otros registros de acción. Sin embargo, esta solución procesa como fenómeno residual (la heterogeneidad de registros) lo que debiera estar en la base misma de la formulación teórica. Es por ello que la primera posición conduce a pensar el movimiento social como actor; mientras que la segunda lo coloca como una lógica más de acción, al lado de otras, de las que la acción colectiva echa mano bajo circunstancias y motivaciones diversas.

Al vivir en sociedad, lo que apreciamos es la coexistencia tensional de orientaciones éticas, de conocimiento y acumulación sumamente variadas y contradictorias que no se agotan en la idea de formación socioeconómica del marxismo, como tampoco en la del sistema de acción histórica touraineana. Aún ahora, si pretendemos fundamentar la idea de una articulación central de la sociedad dada por la historicidad, con base en las tendencias homogeneizantes de la globalización, nos encontraremos inmediatamente con tendencias de signo inverso que activan lo regional y lo local —no necesariamente como una reacción de signo retardatario—, de manera muy discontinua en el espacio y en el tiempo. Los escenarios fragmentados que de esta tensión emergen nos impiden hablar de una configuración central subyacente de cualquier tipo. A la par de lo anterior, los conflictos se complejizan y se tornan más difusos para los individuos movilizadas, los adversarios son difícilmente

reducibles a una sola y clara entidad, y la identidad no es más, al menos no necesariamente, la conciencia de ser la clase o el movimiento que representa al conjunto de la sociedad (aun si los discursos oficiales de las élites dirigentes lo sostienen). Políticamente, por supuesto, el reto para las acciones colectivas es articular demandas globales y precisas sin apelar a determinismos o centralidades ahistóricas de ningún tipo para justificarlas.

Sin embargo, no se trata de renunciar a la noción de historicidad. El problema radica en el traslado acrítico de su definición como articulación de modelos, cuyo origen era heurístico, al nivel de lo empírico-concreto. Este mismo error ha conducido a la búsqueda de actores capaces de encarnar la lógica de acción “movimiento social”, provocando la obsesión por encontrar al o a los protagonistas (ciertamente no predeterminados históricamente) de la transformación de dicha historicidad. En dirección inversa, el efecto de renunciar a parámetros analíticos del tipo de la historicidad, el sistema político y la organización social ha conducido a caracterizaciones totalmente laxas de las formas de acción colectiva, para las cuales casi cualquier manifestación social es movimiento social (desde una organización, una corriente de opinión, un conjunto coordinado de organizaciones, una corriente de acciones dentro de lapsos prolongados de tiempo sin que exista de por medio una conexión directa y continua entre ellas, etc.). En este tipo de consideraciones, es la trasgresión de los límites del sistema político, la conformación de alternativas de gobierno con alcance nacional, o simplemente el desbordamiento de los límites de un sistema de acción concreto lo que autoriza a hablar de movimiento social. El nivel de confusión que este proceder introduce es muy claro y limita en forma importante los resultados y las propuestas de los análisis que los sostienen.

Por ello, para intentar dar cuenta de la complejidad creciente de lo social sin perder los parámetros analíticos que

nos permitan ser rigurosos, es pertinente regresar a los niveles propuestos por Touraine, para recomponerlos. Para hacer esto, es necesario introducir conceptos de alcance medio que den cuenta, de forma más específica, de la diversidad de orientaciones éticas, de conocimiento y acumulación que constituyen el ámbito de la historicidad, así como de las cambiantes tensiones y contradicciones presentes en las relaciones entre las mismas. Esta estrategia es, desde luego, tan sólo un camino más de exploración, pero sospecho que un camino fértil.

En consecuencia, liberar a la acción colectiva de una noción “dura” de historicidad, permitiría percibir sin mucha dificultad que la acción colectiva es más un híbrido que compatibiliza tensionalmente diversas lógicas de acción —las cuales no poseen ninguna jerarquía previamente dada entre ellas—, que la encarnación de alguna de esas lógicas. En esta medida, el problema importante es definir cómo una acción concreta puede coordinar lógicas diversas en su desempeño, más que establecer el registro de acción donde se sitúa (lo que precisamente provoca caer en la identificación entre lógica de acción y actor concreto). En un sentido más amplio, podríamos cuestionar entonces cómo se articulan en tensión las distintas tendencias de orden y cambio en una sociedad, y no cómo ésta se dota de una direccionalidad teleológica. ☹

Bibliografía

- Argüello Mendoza, María Yolanda (1996). *Alianza Cívica/Observación 94 y las elecciones federales (reportaje)*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, México.
- Durand, Jorge (comp.) (1999). *Movimientos sociales. Desafíos teóricos y metodológicos*, Guadalajara, UdeG.
- Familiar Arteaga, Arturo (1997). *La ruta del tractor, el desarro-*

- llo de *El Barzón Unión Nacional (Reportaje)*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, México.
- Gramont, Hubert de y Héctor Tejera (1996). "Los actores y la política estatal: acciones y resultados", en Gramont de, H. y Tejera, O., *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. Vol. IV, Los nuevos actores sociales y procesos políticos en el campo*, INAH, UAM, UNAM y Plaza y Valdés, México.
- (1996). "La organización gremial de los agricultores frente a los procesos de globalización en la agricultura", en Gramont de, H., (coord.), *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, UNAM y Plaza y Valdés, México.
- Lean McConnell, Sharon (1996). *Alianza Cívica: un nuevo actor no-gubernamental en el ámbito político mexicano*. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO, México.
- López, Luis (1998). *Imaginario social y creación de ciudadanía. Las transformaciones identitarias en dos organizaciones sociales: Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y Alianza Cívica*. Tesis de Maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.
- Machuca Sánchez, Ana M. (1997). *La Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Industriales, Comerciantes y Prestadores de Servicios El Barzón AC. Origen y desarrollo de un nuevo movimiento social en México (1993-1997)*. Tesis de Licenciatura en Sociología, UNAM, México.
- Martuccelli, Danilo y Patricia Svampa (s/f). *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Editorial Losada, Buenos Aires.
- Mestries, Francis (1995). "El Barzón o la radicalización de los medianos y grandes productores agrícolas", en *Sociológica*, núm. 28, mayo-agosto.
- Ramírez Sáiz, Juan Manuel (1997). "Movimientos ciudadanos y democracia: El caso de Alianza Cívica", en Alonso, Jorge y Juan Manuel Ramírez (coords.), *La democracia de los de*

Bibliografía

- Bibliografía
- abajo en México*, La Jornada, UdeG, CIICH-UNAM, México.
- (1998). *Y usted, ¿ya es ciudadano?*, separata de la *Revista Universidad de Guadalajara*, Colección de Babel, núm. 13, Guadalajara.
- Rea, Carlos (1998). *Identidades políticas en Nayarit. El caso de los partidos opositores de izquierda (1972-1997)*. Tesis de Maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.
- Rodríguez, Guadalupe y Gabriel Torres (1996). "El Barzón y la Comagro: la resistencia de los agroproductores a la política neoliberal", en Gramont de, H. y Tejera, O., *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*. Vol. IV: *Los nuevos actores sociales y procesos políticos en el campo*, INAH, UAM, UNAM y Plaza y Valdés, México.
- Torres, Gabriel (1997). "El derecho de barzonear y sus efectos políticos", en Alonso, Jorge y Juan Manuel Ramírez (coords.), *La democracia desde abajo*, México, Ed. La Jornada-CIICH/UNAM-CEEJ.
- (1998). "Las siete vidas de El Barzón: tensiones en la construcción de una fuerza política nacional", en Gutiérrez, Esthela (coord. gral.). *El debate nacional*. Tomo 4: *Los actores sociales*, México, UdeG-Diana.
- (1994). *The force of irony. Studying the everyday life of tomato workers in Western Mexico*, CID-DATA, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
- Touraine, Alain (1988). *La parole et le sang*, Editions Odile Jacob, París.
- (1993). *Production de la société*, Seuil, París.
- Zermeño, Sergio (1996). *La sociedad derrotada*, Siglo XXI, México.
- Entrevista a Juan Manuel Ramírez Sáiz, realizada en Guadalajara, Jalisco (10/02/00).